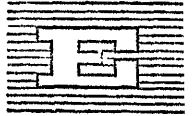


NACIONES UNIDAS  
CONSEJO  
ECONOMICO  
Y SOCIAL



Distr.  
GENERAL

E/CN.4/1984/10  
1º de febrero de 1984

ESPAÑOL  
Original: INGLES

COMISION DE DERECHOS HUMANOS  
40º período de sesiones  
Tema 12 del programa provisional

CUESTION DE LA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES  
FUNDAMENTALES EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO, Y EN PARTICULAR EN  
LOS PAISES Y TERRITORIOS COLONIALES Y DEPENDIENTES

Nota verbal de 30 de enero de 1984 dirigida al Secretario General  
por la Misión Permanente de la República Socialista  
Democrática de Sri Lanka

La Misión Permanente de la República Socialista Democrática de Sri Lanka tiene el honor de remitir adjunto un memorando del Gobierno de la República Socialista Democrática de Sri Lanka y solicita que se distribuya a los representantes en el 40º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos como documento de información, preparado a tal efecto por el Gobierno de la República Socialista Democrática de Sri Lanka.

La Misión Permanente desea subrayar que el memorando se presenta por libre voluntad del Gobierno de Sri Lanka y que esta decisión del Gobierno está en consonancia con su política constante de cooperación con las Naciones Unidas en sus actividades de derechos humanos y de colaboración en tales actividades.

Anexo

MEMORANDO DIRIGIDO AL 40º PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION  
DE DERECHOS HUMANOS, GINEBRA, POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA  
SOCIALISTA DEMOCRATICA DE SRI LANKA

I. INTRODUCCION

1. En su resolución 8 (XXIII), de 16 de marzo de 1967, la Comisión de Derechos Humanos pidió a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías que preparase un informe que incluyera información sobre violaciones de los derechos humanos y libertades fundamentales procedente de todas las fuentes disponibles y que pusiese en conocimiento de la Comisión toda situación respecto de la cual tuviera motivos razonables para creer que revelaba un cuadro persistente de violaciones de derechos humanos y de las libertades fundamentales en cualquier país.
2. La Subcomisión, actuando con arreglo a la susodicha resolución, aprobó por 10 votos contra 8 y 4 abstenciones en su 30ª sesión, el 5 de septiembre de 1983, una resolución sobre Sri Lanka (resolución 1983/16).
3. En dicha resolución, aun reconociendo que el Gobierno de Sri Lanka había tratado de reducir la tensión étnica y promover la armonía nacional, se expresaba preocupación por las relaciones entre las comunidades étnicas, que parecían haber empeorado, y se pedía al Secretario General que invitase al Gobierno de Sri Lanka a que presentara "información sobre la violencia reciente entre las comunidades de ese país, incluidos sus esfuerzos para investigar los incidentes y promover la armonía nacional y que transmitiese "toda la información recibida del Gobierno de Sri Lanka a la Comisión de Derechos Humanos en su 40º período de sesiones". En la resolución se recomendaba asimismo a la Comisión de Derechos Humanos que examinase la situación en Sri Lanka a la luz de toda la información disponible.
4. El Gobierno de Sri Lanka, si bien no pone en tela de juicio la competencia de la Subcomisión para examinar estas cuestiones en virtud de la resolución 8 (XXIII) de la Comisión de Derechos Humanos, alega en su memorando:
  - a) Que los disturbios étnicos de julio de 1983, aunque deplorables y lamentables, fueron una desviación de la muy arraigada línea de conducta seguida en Sri Lanka en un contexto de gobierno democrático y con una sólida tradición de buena armonía entre las comunidades y entre las confesiones religiosas.
  - b) Que la Subcomisión examinó los disturbios de 1983 de manera aislada y no tomó en consideración todas las circunstancias de la situación étnica en Sri Lanka.
  - c) Que los intentos del Gobierno de Sri Lanka de reprimir los disturbios y restablecer la ley y el orden en el país manteniendo al mismo tiempo el diálogo con todas las partes interesadas son igualmente revelaciones de la clara conciencia que viene tanto del pasado y presente ambiente de armonía intercomunitaria como de la necesidad de examinar y resolver ciertas cuestiones que, en los últimos tiempos, han cometido esa armonía a tensiones excesivas y a terribles consecuencias con ella.

5. La composición étnica de la población de Sri Lanka (censo de marzo de 1981) es la siguiente:

Cingaleses	10 985 666	(73,98%)
Tamiles de Sri Lanka	1 871 535	(12,60%)
Moros de Sri Lanka	1 056 972	(7,12%)
Tamiles indios	828 233	(5,56%)
Malayos	43 378	(0,29%)
Burghers	38 236	(0,26%)
Otros	28 981	(0,20%)
	<hr/>	
	14 850 001	
	=====	

6. La historia de Sri Lanka, de la antigüedad a la época contemporánea, ofrece abundantes pruebas de la tolerancia racial y religiosa que ha inspirado el desarrollo social y político de las distintas comunidades que constituyen la nación de Sri Lanka. Si bien cada grupo étnico ha mantenido viva la conciencia de su propio patrimonio cultural y ha tratado de preservarlo y fomentarlo, no lo ha hecho a costa de ningún otro grupo étnico ni religioso.

7. Sri Lanka es una república soberana e independiente. Constituye un Estado unitario y una de las democracias parlamentarias más antiguas del Tercer Mundo. Es una democracia entusiasta con un sistema pluripartidista en la que rigen el imperio del derecho y el respeto de los derechos de la persona. Existe la libertad de prensa y la posibilidad de expresar opiniones discrepantes. El pueblo viene gozando del ejercicio del sufragio universal desde 1931 y su participación activa en la vida política del país ha dado lugar a que se hayan hecho rápidos progresos en la mejora de la calidad de la vida. Los significativos y trascendentales cambios introducidos en diversos campos, como los de los programas de desarrollo económico, la educación, la sanidad y los servicios sociales, son buena prueba de ello.

8. El presente Gobierno del Presidente Jayewardene tomó posesión en julio de 1977. La nueva Constitución de 1978 garantiza a todos el ejercicio de los derechos fundamentales, en particular la libertad de religión, la igualdad ante la ley, el derecho a no ser objeto de detención arbitraria, la libertad de palabra, de reunión, de asociación, de ocupación y de circulación. La Constitución garantiza el amparo o tutela de esos derechos ante los tribunales de justicia. El Gobierno también ha ratificado, como se recuerda en la resolución 1983/16 de la Subcomisión, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

9. La argumentación del grupo separatista eelamista se basa fundamentalmente en la idea de que la comunidad tamil de Sri Lanka es objeto de activa discriminación en los campos de la igualdad de oportunidades, el empleo, la educación, la colonización agrícola, la libertad religiosa y el idioma. Basta el examen de las disposiciones constitucionales promulgadas en septiembre de 1978 para refutar esas alegaciones.

10. La especial trascendencia de la Constitución de 1978 emana de los factores siguientes:

- i) Amplía los derechos fundamentales enunciados en la Constitución anterior. Los derechos fundamentales amparados por la Constitución se enuncian en el capítulo 3, que se basa en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
- ii) La Constitución misma dispone la protección jurisdiccional contra la infracción o la infracción inminente de derechos fundamentales por actos de la Administración.
- iii) En lo que se refiere al idioma, la Constitución dispone que el idioma oficial es el cingalés, pero que tanto el cingalés como el tamil son idiomas nacionales. La Constitución misma especifica el modo de aplicación de las disposiciones sobre el idioma que, en particular, faculta a una persona para recibir enseñanza en cualquiera de los idiomas nacionales; el tamil es el idioma administrativo y de los tribunales en las provincias septentrionales y orientales; se exige que todas las leyes se publiquen en los dos idiomas nacionales.

11. Merece señalarse que las libertades fundamentales antes mencionadas se hacen extensivas en la Constitución a los tamiles indios, aun cuando no son ciudadanos de Sri Lanka; con arreglo al Acuerdo indocingalés tienen que adquirir la ciudadanía de Sri Lanka o la de la India y trasladarse a este último país.

12. En 1981 se procedió a una descentralización administrativa mediante la creación de consejos regionales de desarrollo que facilitan la participación activa de los habitantes de cada distrito en la administración del mismo y dan expresión a las necesidades sociales o culturales concretas de la región. El Gobierno mantiene un diálogo constante con los Miembros del Parlamento tamiles y los dirigentes de la comunidad tamil para resolver todas las demás cuestiones que requieran su atención.

13. La gran mayoría de la población tamil está satisfecha de esas medidas. Ahora bien, como en muchos países, hay un pequeño grupo de descontentos. Este grupo, aunque reducido, ha tratado en los últimos años de hacer prosélitos en pro de un Estado separado llamado "Eelam". Es en este contexto que grupos de extremistas iniciaron su campaña de violencia.

14. Sus acusaciones al Gobierno de discriminación contra la comunidad tamil en materia de igualdad de oportunidades, empleo, educación, libertad religiosa e idioma son fundamentales para su campaña de agitación. Uno de los elementos principales del programa separatista del Frente Unido de Liberación Tamil en su manifiesto electoral de 1977 era la alegación de que la comunidad tamil no tenía otra solución que la separación como consecuencia de la discriminación constante practicada contra ella por la comunidad mayoritaria. Se inició en muchos países una bien planeada campaña de propaganda malévola y hábil, con el mismo pretexto de discriminación, para justificar las actividades terroristas en el norte de Sri Lanka y obtener apoyo internacional para el Estado de Eelam.

## II. REFUTACION DE LAS ACUSACIONES DE DISCRIMINACION

Empleo

15. El Gobierno es el empleador más importante y la comunidad tamil sigue ocupando una posición dominante en la Administración pública, en particular los puestos reservados a altos funcionarios, jefes de departamento, embajadores en misiones diplomáticas, altos cargos de organismos estatales y de la Administración provincial. Tres ministros del Gobierno, el Fiscal General, el Inspector General de Policía y varios inspectores generales adjuntos de policía pertenecen a la comunidad tamil.

Educación

16. La acusación de discriminación no está justificada. El cuadro estadístico que figura a continuación pone de relieve que el número de miembros de la comunidad tamil admitidos en las universidades es proporcionalmente superior a su número total en el país:

Admisión en las universidades en los años académicos 1981-1982  
y 1982-1983

Medio	1981/82		1982/83	
	Número	Porcentaje del total	Número	Porcentaje del total
Cingalés	3 847	76,5	3 953	74
Tamil	1 138	23	1 323	25,2
Inglés	25	0,5	44	0,8
	5 010		5 320	

Jaffna y Batticaloa cuentan con su propia universidad. Uno de los principales agravios de la comunidad tamil era el sistema antes vigente de normalización de la calificación de las pruebas de admisión a la universidad introducido para compensar las ventajas de que gozaban los estudiantes procedentes de distritos que contaban con mayores medios educativos. El actual Gobierno ha abolido este sistema y eliminado de ese modo lo que la población tamil consideraba un agravio importante.

Desarrollo de las regiones septentrional y oriental

17. Los indicadores sociales y económicos ponen de manifiesto que la calidad de la vida material de todos los ciudadanos es muy alta y la política del Gobierno en materia de desarrollo está concebida de modo que redunde en beneficio de todos los sectores de la población. Un sistema presupuestario descentralizado proporciona fondos a todos los distritos administrativos. Se han elaborado unos 20 programas de desarrollo para las regiones septentrional y oriental de Sri Lanka en las que se concentran

los tamiles. Entre 1978 y 1982 los distritos de las provincias septentrional y oriental han recibido del presupuesto descentralizado el doble del importe de fondos para el desarrollo. Por otra parte, la provincia septentrional, de habla predominantemente tamil, ha registrado el gasto por habitante más elevado del presupuesto descentralizado de todo el país.

### Libertades sociales y religiosas

18. La Constitución de 1978, aunque reafirma el lugar principal que corresponde al budismo, que cuenta con más de diez millones de creyentes (aproximadamente el 70% de la población), garantiza a todos el derecho a tener cualquier creencia religiosa. La Constitución prohíbe la discriminación por motivos de raza, religión, lengua, casta, sexo, opinión política, lugar de nacimiento o por cualquier otro motivo de esta índole. Garantiza también la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión e incluye disposiciones sobre la libertad del culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. El Código Penal establece penas específicas para los delitos contra la libertad religiosa y el respeto y la tolerancia de todas las confesiones. El apoyo del Estado se extiende a todas las religiones, incluido el hinduismo, religión dominante de la comunidad tamil. En el marco del Ministerio de Desarrollo Regional, cuyo titular es un miembro de la comunidad tamil, se ha creado una División de Asuntos Religiosos Hindúes. En abril de 1982 se convocó en Colombo la Primera Conferencia Mundial Hindú, cuyos gastos corrieron a cargo del Estado.

### III. CUESTIONES EXAMINADAS POR LA SUBCOMISION

19. La Subcomisión se ocupó, entre otras diversas cuestiones, de la Ley de Prevención del Terrorismo, que fue considerada por algunas delegaciones como un factor que perjudicaba las relaciones entre las comunidades étnicas en Sri Lanka.

20. El Gobierno, en vista de la persistente campaña de terrorismo realizada por esos grupos terroristas, se vio en la necesidad de promulgar una legislación especial para preservar la unidad y la integridad territorial del país. La Ley de Prevención del Terrorismo (disposiciones transitorias) entró en vigor el 20 de julio de 1979.

21. Esta legislación es análoga a la de otros países democráticos que han puesto en vigor una legislación especial para hacer frente a los actos de terrorismo. En modo alguno va dirigida contra un grupo racial en particular.

22. La Ley, que es aplicable a ciertos delitos, establece la confiscación de bienes en caso de condena, la práctica de registros por funcionarios de policía de determinadas categorías, sin necesidad de orden judicial, la puesta a disposición del detenido ante un juez en el término de 72 horas y la detención por orden del Ministro por períodos de tres meses como máximo (a condición de que el período total de privación de libertad no exceda de 18 meses).

23. Se han introducido en la Ley ciertas garantías automáticas:

- 1) La Ley confiere la facultad de proceder a una detención únicamente a un comisario de policía. Un subinspector de policía puede también efectuar una detención, a condición de que esté autorizado para ello por un comisario de policía.

- ii) La persona sospechosa que sea detenida y los familiares o amigos que se encuentren presentes son informados por el agente que practica la detención de las razones de ésta.
- iii) A la persona que es aprehendida en virtud de una orden de detención se le entrega una copia de dicha orden. En ésta se hacen constar las razones de la detención y se indica además el lugar en que esa persona permanecerá detenida.
- iv) Queda establecida una Comisión Asesora nombrada por el Presidente para atender las quejas que presenten los detenidos u otras personas en su nombre y para hacer recomendaciones al respecto al Ministro de Defensa (Presidente).

24. Por otra parte, la Ley de Prevención del Terrorismo no suprime el derecho al recurso de habeas corpus. Este procedimiento sigue siendo aplicable a cualquier persona que se encuentre detenida en aplicación de las disposiciones de esta Ley. Con arreglo al recurso de habeas corpus previsto en el artículo 141 de la Constitución, toda persona que se encuentre detenida puede impugnar ante los tribunales la validez de la orden de detención. El tribunal, si el examen del asunto muestra que la persona se encuentra injustamente detenida, dispondrá lo oportuno para que sea puesta en libertad.

25. En la Ley de Prevención del Terrorismo se prevé además la posibilidad de que el Tribunal de Apelación ponga en libertad bajo fianza a cualquier persona detenida con arreglo a las disposiciones de la Ley.

26. La Comisión se ocupó también de la disposición de la reglamentación sobre el estado de excepción (Emergency Regulation 15A) referente a la inhumación o cremación de los cadáveres. Esta reglamentación no tenía por objeto conferir nuevas facultades a los servicios competentes y a la policía, sino permitir a las autoridades retirar los cadáveres de modo que no encendiera las pasiones de las comunidades. En el caso de una persona muerta en el curso de disturbios comunales o a consecuencia de actos terroristas o incluso de operaciones realizadas por las fuerzas armadas, si el cadáver era trasladado a su aldea natal para su entierro o cremación, las honras fúnebres ofrecerían precisamente una oportunidad para encender las pasiones de las comunidades. Esta medida se tomó también para evitar que la acción sensacionalista de los medios informativos pudiera exacerbar más los ánimos.

27. Conviene tener en cuenta que, si bien con arreglo a esta reglamentación se podía prescindir de una investigación judicial, el Secretario de Defensa tiene la obligación de proceder a una encuesta para determinar todas las circunstancias del caso y debe dar su aprobación antes de que el cadáver pueda ser enterrado o cremado. El hecho de que se dispense la instrucción de una investigación judicial no excluye la obligación de practicar una autopsia en la que el médico forense hace constar las causas de la muerte y la naturaleza de las lesiones.

28. La Subcomisión se ha referido al comportamiento de las fuerzas armadas el 23 de julio de 1983, a raíz de la muerte de 13 militares en el distrito de Jaffna, provincia septentrional de Sri Lanka, a manos de grupos terroristas de tamiles extremistas. Estos grupos habían empezado su agitación en pro de un Estado separado llamado "Eelam" y habían iniciado su campaña de terror a mediados del decenio

de 1970; sus principales objetivos habían sido los políticos tamiles que desempeñaban cargos públicos y las fuerzas de policía en la región septentrional.

29. Como el público, debido al temor a las represalias, se resistía a prestar testimonio, era difícil aprehender a los terroristas y enjuiciarlos. El asesinato de esos militares tuvo sus inevitables repercusiones en la moral y la disciplina de la policía y las fuerzas armadas, así como en el ánimo de la comunidad cingalesa.

30. El incidente del 23 de julio de 1983 agitó aun más los ánimos y algunos militares, infringiendo las órdenes, quisieron aplicar represalias. Este acto de indisciplina fue rápidamente reprimido y los culpables fueron arrestados.

31. En la actualidad se procede a investigar estos incidentes y a todos los oficiales responsables de estos actos se les aplicarán las disposiciones de la ley. El Gobierno de Sri Lanka no condona los actos de este grupo de militares que en una situación de alteración temporal de la ley y el orden actuaron en violación de las órdenes de sus superiores.

32. La Subcomisión se refirió también a los 53 presos tamiles a los que desgraciadamente se dio muerte con ocasión de los disturbios ocurridos en la cárcel de Welikada los días 25 y 27 de julio.

33. Se trataba de presos que o bien habían sido condenados, o bien estaban procesados o eran objeto de una investigación en relación con actos de terrorismo y asesinato. Inicialmente habían estado detenidos bajo la custodia del ejército, en condiciones de máxima seguridad. No obstante, a instancias del abogado defensor que les representaba habían sido trasladados a una prisión ordinaria para detenidos civiles.

34. En la tarde del 25 de julio unos 300 presos, después de dominar a los guardianes de la prisión se lanzaron contra los presos tamiles. Los guardianes hicieron todo lo posible para detener la acometida pero sus esfuerzos fracasaron ante la superioridad numérica de los atacantes. Estos después de neutralizar a los guardianes y apoderarse por la fuerza de las llaves de las celdas, irrumpieron en ellas y en una hora mataron a 35 presos tamiles. El 26 de julio los demás presos tamiles fueron trasladados a una sección de la cárcel de Welikada que se consideraba más segura. El 27 de julio se tomó la decisión de trasladarlos esa misma noche a Batticaloa, en la provincia oriental. No obstante, por la tarde del 27 de julio hubo otra violenta acometida cuando corrió la voz entre los presos de que cierto número de presos y oficiales cingaleses habían sido muertos en unos disturbios en Jaffna. En el segundo motín mataron a 18 presos tamiles.

35. El motín que estalló en la cárcel en la tarde del 27 de julio sólo pudo ser dominado gracias a una unidad especial del ejército que fue enviada allí para restablecer la ley y el orden. Los 20 presos tamiles restantes que estaban recluidos en aplicación de la Ley de Prevención del Terrorismo fueron llevados de la cárcel de Welikada a Batticaloa en la noche del 27 de julio.

36. Se incoaron sin tardanza los procedimientos judiciales normales y se practicó una investigación judicial sobre estos incidentes en aplicación de lo dispuesto por la ley. Los hechos fueron calificados por las autoridades judiciales de homicidio cometido en un motín de la cárcel. El juez resolvió que los funcionarios de la



cárcel, así como el personal del ejército que había acudido allí por haber sido requerido para ello, habían hecho todo lo que estaba a su alcance para sofocar la revuelta e impedir la agresión a otros presos y un motín en la cárcel de escala masiva. A juicio del juez, el número de la muchedumbre amotinada y la rapidez con que se produjo la acometida habían hecho que todos los esfuerzos de ese personal fueran inútiles por lo que se refiere a los presos víctimas del ataque.

37. Las cárceles de Sri Lanka se componen principalmente de edificios que tienen más de 100 años, que fueron construidos durante el período colonial y están destinados principalmente a impedir la evasión desde dentro de las cárceles, pero no hay nada previsto en ellos para aislar a los presos de modo que impida el contacto de unos con otros. El principal dispositivo de seguridad está en el perímetro que separa la prisión del exterior. En estas condiciones, cuando estallaron los motines que fueron la secuela de disturbios ocurridos en otras partes del país el limitado número de guardianes de la cárcel no pudo dominar la situación.

#### IV. MEDIDAS DE REHABILITACION Y RECONCILIACION

38. El Gobierno pudo restablecer el orden en poco tiempo. Puso en marcha un plan general de socorro que consistió en proporcionar seguridad, alimentos, ropas, alojamiento y rehabilitación a las personas afectadas. El Gobierno apoyó sin reservas las actividades de socorro y rehabilitación, así como de reconciliación, realizadas por las organizaciones no gubernamentales locales, entre ellas la Cruz Roja de Sri Lanka y el Movimiento Sarvodaya. El 7 de agosto de 1983 el Gobierno estableció una entidad, la Rehabilitation of Property and Industries Authority (REPIA) con objeto de restaurar todas las propiedades afectadas. Cierta número de organizaciones internacionales y de países procuraron ayuda para este esfuerzo y la asistencia del sistema de las Naciones Unidas fue coordinada gracias al representante en Colombo de la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en casos de Desastre (ONUSCD) y el PNUD. Los informes de la ONUSCD correspondientes a agosto de 1983 muestran el progreso del plan de socorro del Gobierno, escalonado en tres fases.

39. En la actualidad sólo quedan 1.000 familias, que constituyen en total 5.000 personas, en los centros de rehabilitación de Colombo y 1.000 familias en Jaffna, con un total de 4.500 personas. Se espera que la rehabilitación de estas 9.500 personas quedará terminada a fines de marzo de 1984.

40. Además, se tomaron medidas para castigar a los responsables e impedir la repetición de tales incidentes. El número total de personas detenidas en aplicación de las Emergency Regulations por haber tomado parte en los actos de violencia fue de 6.780. Fueron puestas en libertad bajo fianza 2.280 personas mientras se sigue la instrucción de su causa. Al 30 de enero de 1984 había un total de 400 asuntos que habían sido elevados al Fiscal General para la formalización de la acusación. El número de expedientes tramitados asciende a 150. Veintiseis denuncias que afectaban a unas 70 personas sospechosas han dado lugar a acusaciones de homicidio; se han presentado 50 denuncias por actos de pillaje e incendio criminal, y se han interpuesto 40 denuncias más por delitos de menor gravedad.

41. El Gobierno de Sri Lanka tiene la firme voluntad de fortalecer la unidad nacional fomentando la cooperación y la comprensión mutua entre todos los pueblos de Sri Lanka. Esta voluntad está en consonancia con los principios rectores de la política del

Estado y los deberes fundamentales consagrados en la Constitución, en virtud de los cuales el Gobierno tiene la obligación, entre otras cosas, de fortalecer la unidad nacional fomentando la cooperación y la confianza entre todos los grupos raciales, religiosos, lingüísticos y de otra índole en Sri Lanka. En este contexto, el Gobierno mantiene un diálogo constante acerca de los derechos de las minorías con todos los partidos políticos así como con otros grupos.

42. Como parte de este proceso, en enero de 1984 el Presidente de Sri Lanka reunió una conferencia de todos los partidos políticos que representan las diversas ideologías y grupos étnicos, con objeto de examinar los problemas y las propuestas pertinentes en relación con los derechos de las minorías y de encontrar soluciones aceptables para todas las partes interesadas dentro del marco democrático del país.

43. El Gobierno de Sri Lanka afirma que la situación del país no constituye una violación patente de los derechos humanos ni revela un cuadro persistente de violaciones de tales derechos. Sri Lanka ha participado y cooperado constantemente en las actividades de las Naciones Unidas en la esfera de la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo. Es parte en diez instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Comité de Derechos Humanos, en su 20º período de sesiones, celebrado en octubre de 1983, expresó su aprecio por los esfuerzos realizados por el Gobierno de Sri Lanka para la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el diálogo sumamente útil que se había iniciado entre el Comité y el Gobierno.

44. Los sucesos de julio de 1983 fueron causados por una minoría de elementos que actuaron al margen de la ley en circunstancias particulares. Los culpables han sido o son castigados y el Gobierno ha iniciado un complejo y delicado proceso político para resolver las cuestiones fundamentales que dieron lugar a los acontecimientos de julio de 1983. En este contexto, la aportación positiva que la comunidad internacional puede hacer es desistir de toda acción o comentario sobre la situación en Sri Lanka.

45. El Gobierno de Sri Lanka confía en que la Comisión de Derechos Humanos, habida cuenta de la documentación contenida en el presente informe, considerará con el mayor detenimiento y cuidado todos estos hechos cuando se estudie en su 40º período de sesiones la resolución 1983/16 de la Subcomisión.

-----